

---

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, del 9 de abril de 2018.

Materia: Penal.

Recurrente: Gregorio Antonio Céspedes.

Abogado: Lic. José Iván Meilan.

Dios, Patria y Libertad

## República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidenta; Esther Elisa Agelán Casanovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 30 de enero de 2019, años 175° de la Independencia y 156° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Gregorio Antonio Céspedes, dominicano, menor de edad, no porta cédula, actualmente privado de libertad en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de Santiago, imputado, contra la sentencia núm. 473-2018-SSen-00014, dictada por Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago el 9 de abril de 2018, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al Juez Presidente en funciones dejar abierta la audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen de la Procuradora General Adjunta inerina al Procurador General de la República, Licda. Irene Hernández de Vallejo;

Visto el escrito del memorial de casación suscrito por el Licdo. José Iván Meilan, defensor público, en representación del recurrente Gregorio Antonio Céspedes, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 9 de mayo de 2018, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto el escrito de contestación suscrito por el Ministerio Público ante la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago, Licda. Antia Ninoska Beato Abréu, depositado el 15 de mayo de 2018, en la secretaría de la Corte a-qua;

Visto la resolución núm. 3394-2018, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 21 de agosto de 2018, que declaró admisible en cuanto a la forma, el recurso interpuesto y fijó audiencia para conocerlo el 10 de diciembre de 2018, fecha en la cual se difirió el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por motivos razonables; consecuentemente, produciéndose la lectura el día indicado en el encabezado de esta sentencia;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados Internacionales que en materia de Derechos Humanos somos signatarios; los artículos 70, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 423, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; 265, 266, 379, 385-3 del Código Penal, y las resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de 2009,

respectivamente;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

- a) que el 27 de septiembre de 2017, el Procurador Fiscal Titular de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, presentó formal acusación con solicitud de auto de apertura a juicio en contra de Gregorio Antonio Céspedes, dando a los hechos sometidos supuesta violación de los artículos 265, 266, 379, 385-3 del Código Penal, en perjuicio de Scarlet Parra Salas;
- b) que apoderada la Fase de la Instrucción de la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, dictó la resolución núm. 53-2017, el 20 de octubre de 2017, consistente en auto de apertura a juicio, mediante la cual se admitió la acusación en contra de Gregorio Antonio Céspedes, bajo los tipos penales establecidos en los artículos 265, 266, 379 y 385-3 del Código Penal;
- c) que para el conocimiento del fondo del asunto, fue apoderada la Sala Penal del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, la cual dictó la sentencia núm. 459-022-2017-SEN-00038 el 28 de noviembre de 2017, cuyo dispositivo es el siguiente:

***“PRIMERO:** Varía la calificación jurídica dada a los hechos en la acusación y en el auto de apertura a juicio, de los artículos 265, 266, 379, 382 y 385-1-3 del Código Penal Dominicano, por la de los artículos 265, 266, 379, 382 y 386-1-2 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la joven Scarlet Parra Salas; **SEGUNDO:** Declara al adolescente Gregorio Antonio Céspedes, culpable y/o responsable de violar las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 379, 382 y 386-1-2 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la joven Scarlet Parra Sala; en consecuencia, se ordena su privación de libertad por espacio de tres (3) años para cumplirlo en el Centro de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal de esta ciudad de Santiago; **TERCERO:** Mantiene la medida cautelar impuesta al adolescente Gregorio Antonio Céspedes, mediante auto de apertura a juicio 53-2017 d/f 20-10-2017, emitido por la Sala Penal del Segundo Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, hasta tanto la sentencia emitida adquiera carácter firme; **CUARTO:** Declara las costas penales de oficio en virtud del principio x de la Ley 136-03; **QUINTO:** Fija para dar lectura íntegra a la presente sentencia el día martes doce (12) del mes de diciembre del año 2017, a las 9:00 a. m., quedando legalmente citadas las partes presentes y representadas a tales fines”;*

- d) que como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el imputado, intervino la sentencia núm. 473-2018-SEN-00014, dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago el 9 de abril de 2018, cuyo dispositivo establece:

***“PRIMERO:** En cuanto al fondo, se acoge en virtud de lo que establece el artículo 400 del Código Procesal Penal, el recurso de apelación interpuesto en fecha once (11) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), por el adolescente Gregorio Antonio Céspedes y/o Gregorio Antonio Vásquez, acompañado de su madre, la señora Isabel Altagracia Vásquez, por intermedio de su defensora técnica Licda. Aylin J. Corsino Núñez de Almonacid, defensora pública III, en contra de la sentencia penal núm. 459-022-2017-SEN-00038, de fecha veintiocho (28) del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Sala Penal del Primer Tribunal Colegiado de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, por las razones antes expuestas; **SEGUNDO:** En consecuencia, se modifica el ordinal segundo de la sentencia apelada para que en lo adelante se lea: Segundo: Declara al adolescente Gregorio Antonio Céspedes, culpable y/o responsable de violar las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 379, 382 y 386-1-2 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la joven Scarlet Parra Salas; en consecuencia, se ordena su privación de libertad por espacio de dos (2) años y seis (6) meses, para cumplirlos en el Centro de Atención Integral de la Persona en conflicto con la Ley Penal de esta ciudad de Santiago; **TERCERO:** Se confirma en los demás aspectos la sentencia impugnada; **CUARTO:** Se declara las costas de oficio en virtud del principio x de la Ley 136-03”;*

Considerando, que Gregorio Antonio Céspedes, por intermedio de su defensa técnica, alega el siguiente medio:

***“Primer Motivo:** Sentencia infundada por violación al debido proceso y fundada en pruebas obtenidas a través*

de violación a derechos fundamentales. En el escrito de apelación se le reclamó a la corte tres medios de impugnación, los cuales la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago, al momento de responder incurrió en los errores enunciados. En primer lugar, la corte se le reclamó la inobservancia de una norma jurídica en razón de que no se podía legitimar un proceso en el cual se obtuvo a través de la golpiza salvaje que recibió el adolescente por parte de los agentes actuantes, el adolescente desde la medida de coerción viene declarando. Que estas declaraciones fueron coherentes y corroboradas por el certificado médico núm. 4, 112-17 en la cual se establece que el mismo presenta herida abierta 2 cms., de longitud en región frontal, laceraciones de mucosa oral del labio superior, excoriaciones apergaminadas en hombro derecho. Toda esta golpiza con el fin de que el imputado auto incriminarse, taxativamente dispuesta en el artículo 248 de la Ley 136-03 y refuerza el legislador cuando advierte que en el manejo de adolescentes en conflicto con la ley penal “En ningún caso se le exigirá promesa o juramento de decir la verdad, ni se ejercerá coacción ni amenaza”, prohibiendo en dicho artículo con claridad el uso de cualquier medio para hacerle declarar en su contra o en contra de otra persona, ni podrán formularse cargos evidentemente improcedentes con el propósito de obtener una confesión, mandato complementado y sostenido en protección a la integridad de los adolescentes por los artículos 12 y 262 de la Ley 136-03, en tanto destierren el proceso penal juvenil la posibilidad de maltrato físico, psíquico y moral de los menores; **Segundo Motivo:** Sentencia manifiestamente infundada por violación al principio in dubio pro reo en cuanto a la valoración probatoria. La Corte a-qua decidió confirmar la sentencia objeto de impugnación cometiendo el mismo error que cometió la juez de primer grado y es ambos sustentan su sentencia condenatoria en pintos específicos de las declaraciones de la víctima y dejan a un lado las contradicciones que dejan al traste la duda razonable sobre la participación del adolescente en ese hecho. Así las cosas, un elemento radical requería la atención de la Jueza a-qua, pues la declaración de la víctima deja claramente al descubierto la presencia de una incredulidad subjetiva, toda vez que muestra múltiples variaciones que no le permiten revelarse con suficiente consistencia como para destruir la presunción de inocencia del encartado y poder ser considerada como indica la Juez a-qua, como mucho más sustancial que los testigos de defensa”;

Considerando, que según se extrae del fallo impugnado, la Corte a-qua para justificar la decisión, expresó lo siguiente:

“Al analizar la sentencia impugnada esta corte advierte que la jueza del Tribunal a-quo, valoró los elementos de pruebas aportados, estableciendo que el testimonio de la víctima no se pudo apreciar ningún interés espurio en contra del acusado, que la víctima y el testigo declararon que nunca habían visto al imputado ni habían tenido problemas con el mismo, se transcribe en la sentencia impugnada las declaraciones de la víctima, quien asegura que pudo ver la cara de Gregorio Antonio Céspedes... Que no se observa ninguna contradicción, ni indicios de interés espurio, que pudiera desvirtuarlo por lo que dicho testimonio resulta creíble tal y como valoró la juez de primer grado en la sentencia impugnada. Que del mismo modo fue valorado el testimonio del agente actuante Víctor Otáñez Núñez, como coherente y objetivo, dándole entero crédito por tratarse del agente que realizó la persecución en el momento del atraco corroborando así el testimonio de la joven Scarlet Parra Salas, víctima y testigo respectivamente en cuanto a la forma en que ocurrieron los hechos y la persona que los realizó. Lo mismo que en su declaración, el agente policial manifiesta que pudo ver cuando la joven estaba en el forcejeo con el imputado y la forma como la despojó de su cartera, no así cuando el imputado aborda a la víctima, momento en el que esta asegura que le apuntó con una pistola. De igual manera, fueron valoradas correctamente las demás pruebas aportadas por el Ministerio Público, a saber: Acta de arresto por infracción flagrante la cual es valorada como demostrativa de los hechos, misma que fue incorporado al juicio por su lectura, conforme lo establecido en el artículo 312 del Código Procesal Penal y la que es corroborada con la declaración del testigo agente actuante Víctor Otáñez Núñez, quien confirma en audiencia haberla levantado y firmado” (ver considerandos 3, 4, 5 y 6 de la decisión de la corte);

#### **Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por el recurrente:**

Considerando, que la parte recurrente propone dos medios de impugnación, indicando inicialmente de violaciones de índole constitucional al denunciar agresiones del imputado al momento de su detención;

Considerando, que ciertamente el presente caso posee la peculiaridad de que el militar actuante declara sobre

la detención del imputado, detalles que fueron ponderados por la Corte a-quá, dentro de lo reflexionado por el tribunal de juicio, cavilando minuciosamente al tenor siguiente: *“Sin embargo, en la referida acta de audiencia el Ministerio Público manifiesta que el imputado no fue golpeado en sede policial y que lo que se visualiza es que al tirarse del motor se golpeo y se peló, que en la misma acta consta que los policías lo llevaron al hospital, razonamiento que consideramos lógico, en vista que se pudo verificar que ciertamente en el acta de arresto por infracción flagrante se consigna que el adolescente que perdió el equilibrio, máxime que el reconocimiento médico que avala las referidas lesiones sufridas por el imputado, es de fecha 28/8/2017, día siguiente de la fecha que se levantó el acta de arresto (27/8/2017), por tal motivo, las argumentaciones argüidas por la defensa del imputado hoy recurrente, carecen de fundamento por lo que procede rechazar el primer motivo propuesto en el presente recurso con el cual se pretendía invalidar las pruebas a cargo presentadas por el Ministerio Público;”* (ver Págs. 5 y 6). Que de la lectura de la decisión de marras se verifica que la Corte a-quá no ignora las denuncias, recibe y examina su pertinencia, igual que las instancias anteriores, empero no le fue dado aquiescencia, en razón de que el certificado médico describe lesiones que se comparece a lo declarado por el militar actuante y lo argüido por el Ministerio Público sobre las lesiones recibidas por el adolescente;

Considerando que el segundo medio acomete contra los testigos, tanto de la víctima como el militar actuante, aduciendo contradicción en sus declaraciones;

Considerando, sobre la valoración de las pruebas, específicamente de los testigos del juicio, esta Sala ha sostenido en innumerables fallos que el valor que otorgue el juez a los testimonios rendidos en el juicio escapa al control del recurso; que el tribunal de alzada no puede censurar al juez de primer grado la credibilidad otorgada a las declaraciones de testigos, por depender este asunto de la inmediación, es decir, solo el juez de juicio puede valorar si el testigo declaró tranquilo o nervioso, si fue pausado o impreciso, si mostró seguridad o no, y por ello es que se sostiene que ese punto es un asunto que escapa al control del recurso, en razón de que no es posible que un tribunal de alzada revise la credibilidad dada por el juez de juicio a un testimonio que la corte ni vio ni escuchó, a no ser que se produzca una desnaturalización de los testimonios rendidos, lo que no ocurrió en la especie donde se le imputa cargos por robo agravado, siendo de lugar rechazar estas aseveraciones por carecer de fundamento veraz;

Considerando, que el escrutinio de la decisión impugnada, se comprueba que la corte sí revisa lo argüido por el recurrente, lo que no responde favorablemente a sus peticiones, explicándole las razones de la no procedencia de sus reclamaciones, en razón de un fardo probatorio real y presente en el proceso que lo señala e individualiza dentro de fáctico, quedando comprometida su responsabilidad penal fuera de toda duda razonable, y con esto llevando al traste su presunción de inocencia. Que, esta Segunda Sala no advierte vulneración de índole constitucional a verificar que el grado apelativo realizó una labor que se corresponden con los lineamientos que rigen el correcto pensar, y satisfacen las exigencias pautadas; exponiendo de forma concreta y precisa cómo ha valorado la sentencia apelada, y su fallo se encuentra legitimado en una fundamentación ajustada a las normas adjetivas, procesales y constitucionales vigentes y aplicables al caso en cuestión; de tal manera que esta alzada no avista vulneración alguna en perjuicio del recurrente, procediendo en tal sentido, a desestimar el recurso que se trata;

Considerando, que en ese sentido, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, en atención a lo pautado por el artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero del 2015, procede a rechazar los recursos de casación que se trata, confirmando la decisión recurrida;

Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales, las que son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximir las total o parcialmente; por lo que procede dispensarlas en virtud de las disposiciones de la Ley núm. 277-03, que instituye el Servicio Nacional de la Defensa Pública, la que contiene el no pago de las costas penales cuando interviene en la asistencia de algún imputado;

Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, y la

resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta Suprema Corte de Justicia, mandan que copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena correspondiente, para los fines de ley.

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

### **FALLA**

**Primero:** Admite el escrito de contestación presentado por el Ministerio Público ante la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago, Licda. Antia Ninoska Beato Abreu, en el recurso de casación interpuesto por Gregorio Antonio Céspedes, contra la sentencia núm. 473-2018-SSEN-00014, dictada por Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago el 9 de abril de 2018, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia;

**Segundo:** Rechaza el referido recurso de casación, en consecuencia, confirma la decisión impugnada;

**Tercero:** Exime al recurrente del pago de las costas penales;

**Cuarto:** Ordena a la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Sanción Penal de la Persona Adolescente en conflicto con la ley del Departamento Judicial de Santiago, para los fines correspondientes.

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes. Cristiana A. Rosario V., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.